

TRIBUNAL DE JUSTICIA AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA: ALTERNATIVA JURÍDICA RESPONSABLE PARA PREVENIR DESASTRES ECOLÓGICO.

EDGARDO TORRES LÓPEZ

Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte

RESUMEN: El autor del artículo, realiza una introducción sobre la importancia del Derecho Ambiental y la misión que deben cumplir los jueces; seguidamente describe 3 casos de graves daños contra la vida y ecología ocurridos en el Perú. Finalmente, formula algunas ideas, respecto a la labor de los jueces especialistas en Derecho Ambiental y propone la necesidad de constituir un Tribunal Internacional de Justicia en la especialidad ambiental, en América Latina.

ABSTRACT: The author of the article makes an introduction about the importance of environmental law and the mission to be fulfilled by judges. Then describe 3 cases of serious damage to life and ecology occurred in Peru. Finally, it formulates some ideas regarding the work of judges in environmental law specialists and proposes the constitution of Latin-American Environment Court International.

1 Introducción

El Derecho Ambiental o del Medio Ambiente es un derecho autónomo, con dimensión sustantiva y procesal. Asimismo es de interés general y de orden público, conforme se ha establecido en diversos Tratados Internacionales.

El Derecho Ambiental, es negociable en el sentido crematístico. Es un derecho indisponible; de protección de carácter fundamental.

El Derecho Ambiental, tiene la finalidad de prevenir, proteger, restaurar y preservar el ambiente; haciendo efectivo el deber de precaución de la vida y ecología sana.

Su objetivo es la protección de la vida, ecología, fauna, flora, biodiversidad y el desarrollo sustentable y equilibrado en un hábitat saludable;

asimismo evitar la destrucción progresiva de la naturaleza y la vida, orientando la acción humana al bienestar común.

El Derecho Ambiental, ordena las normas substantivas para la preservación del ambiente natural, respecto a posibles acciones destructivas y contaminantes de las personas y las empresas.

El Derecho Procesal Ambiental, proporciona los mecanismos procesales para garantizar el derecho substantivo y hacerlo efectivo.

2 Labor de los jueces

Los jueces en general, tienen la misión de juzgar e impartir justicia. La justicia en esencia es brindar a cada quien lo que corresponde; declarar el derecho o la responsabilidad; o absolver de la acusación. Todo esto sobre la base de normas legales previas y pruebas existentes en un juicio; que pueden formar convicción, o ser insuficientes.

En la especialidad de Derecho Ambiental, por imperativo constitucional y legal de la mayoría de países, los jueces deben hacer respetar el derecho al medio ambiente natural sano y equilibrado. Cuando exista evidencia de delito, deben sancionar en forma ejemplar a los que contaminan y destruyen el medio ambiente; la sanción debe imponerse como una medida necesaria, disuasiva y educativa.

Se entiende que la sanción, no es simplemente la privación de la libertad, o el pago de una reparación. La sanción va más allá. Debe consistir en la restauración del espacio natural dañado; en el lugar producido, o cerca de él; y la indemnización a las víctimas.

Si los mandatos legales y judiciales, de defensa ambiental, se cumplen y hacen cumplir el efecto será positivo, ejemplar y multiplicador como acción preventiva general, de dignidad, conducta adecuada y respeto ambiental.

Requerimos de acciones concretas, de medidas legales efectivas, que demuestren que en todos los países del mundo, los magistrados con sentencias justas y legales, protegen y brindan tutela judicial efectiva a los derechos del medio ambiente.

3 Desastres ecológicos ocurridos en Perú

3.1 Tragedia en la Oroya

La minería formal, informal e ilegal es extensa con determinadas aristas conflictivas en el Perú.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros en 2012; 25 millones de hectáreas a escala nacional fueron objeto de concesiones mineras. Esta cantidad es mayor teniendo en cuenta la existencia de actividades mineras informales e ilegales, combatidas insuficientemente por el Estado.

En lo que se refiere a La Oroya, en la actualidad es una pequeña ciudad de aproximadamente 60,000 habitantes, situada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín en la provincia de Yauli. Dista 176 km de Lima y 125 km de Huancayo (capital del departamento) y se ubica a 3.750 metros de altitud.

La ciudad creció alrededor de un complejo metalúrgico, asentado en 1922. El complejo fue explotado por una empresa estadounidense hasta la década del 70, que fue nacionalizado por el gobierno militar del Gral. Juan Velasco Alvarado, convirtiéndola en CENTROMIN Perú, que explotó la fundición desde 1974 a 1997, época en que se fueron gestando los graves daños ambientales.

Por la estatización del complejo metalúrgico, decisión que fue aplaudida por la mayoría de ciudadanos, como una aparente solución en esa época; años después se comprobaría que el estatismo agravó los problemas; es más el Estado tuvo que pagar grandes indemnizaciones por daños y perjuicios, por los efectos de la denominada nacionalización de empresas.

El Perú desde el inicio del asentamiento minero, tiene el lamentable record de haber convertido un pueblo tranquilo en uno casi fantasma; un verdadero desastre; por la severa contaminación del aire, la tierra y agua, producto de las emanaciones de plomo, mercurio y otros metales, que perjudican la vida, de la fauna, flora silvestre y también de seres humanos, en especial, niños, mujeres y ancianos.

Por la grave contaminación, que se acrecentó con la existencia de CENTROMIN PERÚ hace más de 40 años, el pueblo de La Oroya es casi un museo lúgubre y perjudicado por los daños ambientales; que se resiste a morir, luchando por su vida.

Al paso de los años, el Complejo de La Oroya, fue asumido por Doe Run Company filial estadounidense del Grupo Renco.

Según la página Web de Doe Run el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) está compuesto de un conjunto único de fundiciones y refinerías especialmente diseñadas para transformar el mineral poli-metálico típico de los Andes centrales peruanos en diez metales (Cobre, Zinc, Plata, Plomo, Indio, Bismuto, Oro, Selenio, Telurio y Antimonio) y nueve subproductos (Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre, Ácido Sulfúrico, Trióxido de Arsénico, Óleum, Bisulfito de Sodio, Óxido de Zinc, Polvo de Zinc, Concentrado Zinc/ Plata).

La empresa indica que la fundición y refinerías de La Oroya conforman uno de los centros metalúrgicos con mayores retos tecnológicos del mundo, combinando en un solo lugar las diversas tecnologías y procesos requeridos para transformar los concentrados poli-metálicos y extraer de ellos elementos de alto valor como son Plata, Indio, Bismuto y otros; sin embargo pese a la tecnología, la contaminación generada a lo largo de los años por las empresas que operaron el complejo metalúrgico, es evidente.

El año 2006, el Tribunal Constitucional Peruano declaró que los altos niveles de contaminación en La Oroya estaban causando serios problemas de salud a la población del lugar.

El Tribunal Constitucional, ordenó al Ministerio de Salud de la República de Perú, cumplir con la ley y tomar acciones urgentes para prevenir impactos adicionales irreversibles al ambiente y al derecho humano a la salud.

Esta decisión se basó en estudios técnicos del propio gobierno, y de organizaciones de la sociedad civil.

En la sentencia emitida, el Tribunal Constitucional, aceptó los argumentos presentados por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), quien representó a las personas afectada del pueblo de La Oroya.

El Tribunal dio 30 días al Estado peruano para efectuar las siguientes acciones:

- Brindar atención médica de emergencia a las personas contaminadas con plomo, dando prioridad a las mujeres embarazadas y niños;
- Implementar un plan de acción para mejorar la calidad del aire en La Oroya;
- Declarar el Estado de Emergencia, cuando los niveles de contaminación sean excesivos;
- Establecer programas de monitoreo epidemiológico y ambiental.

La referida sentencia constituye un precedente legal importante, que se pronuncia sobre 3 aspectos fundamentales:

- a) Que los niveles de contaminación extremadamente altos, como los de La Oroya, causan serios e irreversibles daños a la salud de las personas, vulnerando los derechos humanos;
- b) Reitera la obligación del Estado de proteger a las personas, ordenándole que cumpla acciones específicas para reducir las amenazas a la salud en coordinación con la empresa minera.
- c) Confirma que las corporaciones son responsables de desarrollar sus negocios; pero deben hacerlo respetando los derechos humanos a la salud, la vida y un ambiente urbano y natural sano.

En atención a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, el Estado peruano realizó algunos cambios, pero no cumplió a cabalidad la sentencia, por lo que en noviembre de 2005, organizaciones de la sociedad civil presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) para exigir se cumpla el mandato del Tribunal Constitucional.

Dos años después, mientras se esperaba una definición, los demandantes efectuaron una solicitud adicional, a fin que el Tribunal Constitucional dicte medidas de urgencia; que protejan la salud de la población y el medio ambiente en La Oroya.

En agosto del 2009 la CIDH admitió el caso, luego de haber examinado la información que solicitó a organizaciones de la sociedad civil y al propio gobierno peruano. Además, determinó que este último, por intermedio del Ministerio de Salud **debía atender a 65 afectados por la contaminación en La Oroya.**

Hasta aquí, se puede apreciar la ausencia de especialización en derecho ambiental y la falta de rapidez de la CIDH, para atender los casos de violaciones de derechos humanos; y los graves casos de contaminación ambiental en la región; por lo que conforme se viene sosteniendo hace tiempo, sería recomendable para bien de los países del continente constituir un Tribunal de Justicia Ambiental, en América Latina.

El ámbito supranacional del Tribunal, se justifica en razón que el problema de la contaminación es transversal, transfronterizo, y perjudica a los habitantes de todos los países de la región.

Si en un país de América Latina se sufre grave contaminación, tarde o temprano, resultan contaminados los otros, por efecto de los vientos, los ríos que desembocan en el océano Atlántico y Pacífico; las aguas subterráneas y todo el espacio ecológico que vive interrelacionado.

Cuan diferente hubiese sido, si en la época que se estaba gestando la grave contaminación ambiental en La Oroya, habría existido una clara legislación de defensa de la ecología y medio ambiente. Asimismo Juzgados Especializados en Derecho Ambiental; a fin de prevenir los daños; dictar medidas cautelares y principalmente hacer respetar la vida y el ambiente sanos; valores superiores a las actividades de lucro que omiten la responsabilidad social corporativa.

En el caso del ejemplo propuesto, existe consenso en reconocer que se requiere promover e impulsar la minería legal; así como toda actividad económica, que garantice el desarrollo sustentable del país; **respetando y cumpliendo** normas **de derecho ambiental**, con los límites legalmente permitidos de contaminación; sin perjudicar la vida, el agua y el medio ambiente; restaurando, rehabilitando y reponiendo la posibles zonas dañadas.

La grave contaminación en el complejo metalúrgico de La Oroya, en el Perú, no se debería repetir nunca más, en ningún asentamiento minero del país ni de América Latina, ni del mundo.

Un Tribunal de Justicia Internacional Ambiental, prevendría la comisión de daños y perjuicios a la naturaleza; brindado tutela jurisdiccional efectiva para la solución del problema; ordenando las reparaciones y restauraciones correspondientes.



3.2 El caso Lucchetti

Un caso de grave contaminación ambiental en la década de los 90, fue la construcción de una fábrica de fideos denominada Lucchetti, en los Pantanos de Villa, Distrito de Chorrillos, Provincia de Lima Metropolitana; reserva ecológica considerada como santuario natural y refugio silvestre en América Latina.

La trasnacional Lucchetti, logró una cuestionada licencia expedida por la Municipalidad Distrital de Chorrillos y construyó una enorme fábrica de 6 pisos y 30 metros de altura con muros recubiertos de vidrios; edificada para una producción generando actividades que distorsionaban el ambiente natural, con impacto negativo, en los humedales, flora y fauna del lugar.

El recordado ex Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Alberto Andrade, se opuso a la construcción de la fábrica, por la evidencia de daños ecológicos; anulando la licencia concedida por la Municipalidad Distrital de Chorrillos.

El conflicto se judicializó; con la lamentable interferencia del gobierno del Ing. Alberto Fujimori, en esa década.

Si la justicia hubiese sido independiente y rápida en esa época; habría detenido el abuso de construir una fábrica de fideos en un parque ecológico, considerado santuario y refugio natural de fauna silvestre, no solo en Lima, sino de América Latina.

El Poder Judicial en ese entonces, no cumplió su deber de brindar tutela efectiva; por el contrario aplicó falaces argumentos para favorecer a la fábrica, como por ejemplo que prevalece la protección a la inversión internacional y la generación de empleo; **omitiendo considerar el respeto y cuidado al medio ambiente ecológico, esenciales para la salud y la vida.**

La construcción de la fábrica en pocos meses se concluyó con material noble, y muros altos revestidos de espejos, que afectaron el ecosistema de Los Pantanos de Villa.

Al paso de los años, con el cambio de gobierno la justicia prohibió el funcionamiento de la fábrica, por los daños ecológicos que había producido y a la fecha sigue produciendo. Ahora se puede apreciar en pleno Pantanos de Villa, una gran construcción, deshabitada, con lunas polarizadas, que ha generado y sigue generando desequilibrios y conflictos en el santuario ecológico y refugio de vida silvestre; por haberse construido en forma irracional una industria en un lugar natural protegido.

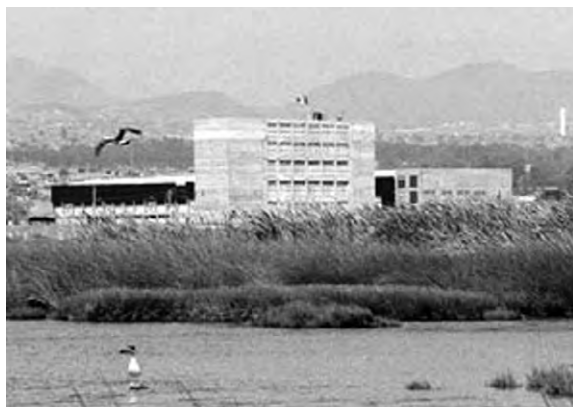
Que diferente hubiese sido, si la justicia cumpliendo su deber, en forma independiente, legal y valiente, aplicando la justicia ambiental, habría hecho respetar los derechos naturales de los Pantanos de Villa y todo el ecosistema en defensa de la vida, flora, fauna y entorno natural.

Entre 2 valores el económico y el del medio ambiente cuando el impacto supera los estándares internacionales permitidos y se afecta la vida natural en forma grave; **la justicia debe preferir el respeto al medio ambiente.**

La infraestructura edificada en la que probablemente se invirtió decenas de miles dólares, no se sabe si será destruida o adaptada para otros fines; el problema continúa por décadas sin que exista una solución definitiva.

La empresa Lucchetti, ha asumido una posición de víctima, y ha demandado al Estado, en Centro Internacional de Arbitraje de Inversiones (CIADI); exigiendo una indemnización por pérdidas de su negocio.

Por este motivo, somos de la opinión que es un imperativo urgente la necesidad de constituir un Tribunal de Justicia Internacional Ambiental en América Latina, que resuelva casos, como los planteados en forma efectiva, rápida, contundente y con la legitimidad y apremios internacionales que corresponden.



Edificación de la Industria de fideos Lucchetti, en la Reserva Ecológica de los Pantanos de Villa, en el Distrito de Chorillos, Lima Perú.



Vista de la Construcción de la fabrica Luchetti, edificio de 6 piso y 30 metros.

3.3 Mortandad de delfines y pelicanos

En el mes de enero de 2013, una noticia estremeció al Perú y a todo el mundo: Centenares de delfines, y pelicanos, aparecieron muertos en las playas del norte de Perú, en el departamento de Trujillo.

Las autoridades del lugar declararon desconocer las causas del desastre. Los ciudadanos del norte del país sí: La alta probabilidad que hayan sido las explosiones que compañías petroleras efectúan para detectar petróleo en el mar; con grandes vibraciones y consiguientes derrames de producto.

Los experimentos y manipulaciones sísmicas en el mar, pueden tener graves consecuencias: Hace 40 años, por ejemplo el gobierno peruano del Gral. Velasco Alvarado rompió relaciones con la República de Francia, porque dicho país efectuó varias explosiones atómicas en el Atolón de Mururoa, ubicado a cierta distancia de la costa central peruana.

Algunos pobladores, llegaron atribuir el terremoto, en el callejón de Huaylas, zona central del Perú, a esas explosiones; hipótesis que no se confirmó.

La mortandad de pelicanos y delfines, esta vez no fue por explosiones atómicas, sino habría sido por explosiones subterráneas en el mar, en la exploración y búsqueda de petróleo. La mortandad de un gran número de delfines, se habría producido por sensibilidad acústica.

Así lo considera el informe de la Organización Científica para la Conservación de Animales Acuáticos (ORCA), que sostuvo que una de las causas principales de la mortandad fueron las exploraciones de petróleo en el mar peruano, según artículo publicado por Sybila Tabra, en un conocido Portal Electrónico del Perú.

El número de especies marinas muertas en la costa norte del mar peruano fueron aproximadamente 3000 delfines que aparecieron varados en las playas de la región Lambayeque, al norte del país.

El informe de ORCA indicó que la muerte de los mamíferos fue causada por una “burbuja marina”, que es una bolsa acústica que se forma al utilizar en la profundidad del mar los equipos para buscar petróleo, gas y otros minerales.

Las petroleras utilizan diferentes frecuencias de onda acústica, que pueden producir en los delfines, lobos marinos y ballenas la muerte por impacto acústico. Carlos Yaipén, director de la ORCA, considera en la publicación registrada en el Portal Electrónico, que el impacto acústico genera en los animales pérdida de equilibrio, desorientación, hemorragias internas, hasta la muerte.

En febrero de 2013 se encontraron los restos de 86 especies marinas en el litoral de Lambayeque. Entre estas 18 tortugas, 22 lobos marinos, 8 delfines, 16 chanchos marinos y 22 aves marinas: 10 piqueros, 10 pelícanos, un albatros.

Los resultados médicos y los análisis de histopatología forenses realizados por ORCA revelaron que los delfines padecían del síndrome de descompresión aguda, evidenciado por fracturas en los huesos perióticos y hemorragia en el oído medio, enfisema pulmonar diseminado, y burbujas de aire en órganos como el hígado, riñón y vasos sanguíneos.

Como experiencia internacional comparada por informaciones extraídas en la Red,¹ se conoce según cifras de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por su sigla en inglés), desde febrero de 2010 hasta principios de enero de 2013 se han encontrado a lo largo de la costa de Luisiana, Estados Unidos, los cuerpos de 830 mamíferos marinos, casi todos ballenas y delfines mulares o nariz de botella, y que se caracterizan por su naturaleza sociable y su inteligencia.

Unas de las causas posibles es el derramamiento del petróleo ocurrido en el Golfo de México.

Otras fuentes indican que la muerte de los delfines comenzó antes del desastre de Deepwater Horizont el 20 de abril de 2010.



1 La República: Tres mil delfines han muerto víctimas de la explotación petrolera: <http://www.larepublica.pe/06-04-2012/tres-mil-delfines-han-muerto-victimas-de-la-explotacion-petrolera>

BBC Mundo: El misterio de los pelícanos y delfines muertos en el Perú: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/04/120429_ultnot_pelicanos_muertos_peru_jgc.shtml

La República: Uso de sísmica 3D en el mar sí atenta contra la vida de delfines: <http://www.larepublica.pe/10-04-2012/uso-de-sismica-3d-en-el-mar-si-atenta-contra-la-vida-de-delfines>

El Comercio: Muerte de delfines se debió a causa natural y no humana, asegura Produce: <http://elcomercio.pe/actualidad/1418107/noticia-muerte-delfines-se-debio-causa-natural-no-humana-asegura-produce>.



Mortandad de delfines y pelicanos en el norte del Perú, año 2013.

5 Internacionalización del Derecho Ambiental

El Derecho Ambiental evidentemente tiene una dimensión internacional, con el fin de prevenir desastres ecológicos en el mundo. Lo que ocurre en cualquier país del mundo, tarde o temprano puede tener repercusión en los demás países. La tierra en el marco del sistema solar es un planeta pequeño, interrelacionado y globalizado no solo por cuestiones económicas y políticas; sino fundamentalmente por aspectos ecológicos, geográficos y climáticos.

En este contexto, en Johannesburgo – Sudáfrica, el año 2002, en el Simposio Mundial de Jueces sobre Desarrollo Sostenible se emitió la Declaración de Magistraturas del Mundo.

En esta Declaración se ratifica el compromiso con la Declaración de las Metas del Milenio adoptado por la Organización de las Naciones Unidas el 2000 y se reconoce que las actividades humanas en determinados casos están generando daños irreparables al planeta, generando el agotamiento de los recursos naturales.

Asimismo se ratifica con firme convicción la Declaración efectuada en la Conferencia de las Naciones sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972.

Dicho declaración reconoce principios de gran importancia, destacando como principales el derecho fundamental del hombre a la libertad, la igualdad y el disfrute de las condiciones de vida adecuadas en un medio sano.

Reconoce la estrecha relación entre el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos.

La Judicatura del mundo en esa oportunidad asumió un compromiso con una serie de documentos internacionales como: “Nuestro Futuro Común” (1987), elaborado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente, documento que también se conoce como el Informe Brundtland, nombre que se dio por la Presidenta de la Comisión Gro Harlem Brundtland, ex Ministra del Medio Ambiente de Noruega.

6 Urgencia de constituir un Tribunal Internacional de Derecho Ambiental

En el IV Congreso Iberoamericano de Cooperación Judicial, de la Red Judicial Latinoamericana (REDLAJ), celebrado en Cartagena de Indias del 21 al 23 de noviembre del 2010, entre otros aspectos se planteó la necesidad de trabajar para constituir un Tribunal Internacional de Derecho Ambiental en América Latina.

La propuesta fue presentada por el magistrado Eladio Licey ex Presidente de la Escuela Nacional de la Magistratura de Brasil.

Un Tribunal de Justicia Ambiental, por los numerosos conflictos socio ambientales de naturaleza transnacional que existen es urgente y necesario.

Lamentablemente, hasta la fecha las organizaciones ambientalistas y los países, han hecho poco o nada, para hacer realidad esa importante y vital propuesta.

Consideramos que si existe decisión y buena voluntad de las autoridades y ciudadanos, el Tribunal de Justicia Ambiental de América Latina, será posible y podría ejercer las siguientes acciones:

- Acceso a la justicia y tutela jurisdiccional efectiva, en materia de Derecho Ambiental Internacional.
- Ordenar acciones a los gobiernos de carácter preventivo en materia de Derecho Ambiental Internacional.
- Actuar como última instancia internacional en los asuntos de conflicto de medio ambiente, que se inicien dentro y fuera de los países; según la importancia y gravedad de la materia.
- Solucionar los conflictos sobre interpretación jurídica de Tratados Internacionales sobre medio ambiente.
- El Tribunal Internacional de Justicia Ambiental, podría también declarar jurisprudencia de carácter vinculante, en defensa del medio ambiente; que debe ser aplicada por los Poderes Judiciales de todos los países.

El referido Tribunal Internacional, podría estar conformado por personalidades de reconocida trayectoria en la defensa del medio ambiente; de sólida formación jurídica y democrática; con amplia experiencia judicial; magistrados designados por sus países. Dicho Tribunal no sólo debe ser un foro de justicia para los países, sino para los ciudadanos y órganos de la sociedad civil.

Para crear el Tribunal de Justicia Ambiental de América Latina, es necesario generar una opinión pública favorable; solicitar, gestionar, y demostrar técnicamente, que es urgente y necesario suscribir un tratado u otro mecanismo legal expeditivo, para la constitución legal.

Dicho Tribunal, podría nacer en el marco de UNASUR, contando con la participación de 15 magistrados de todos los países de América Latina. Sería presidido por un jurista de reconocida por su trayectoria en la defensa del ambiente.

El Tribunal, podría estar dividido en 3 Salas de 5 miembros. Las especialidades de las Salas, serían Derecho Ambiental Laboral, Derecho Ambiental Civil/Constitucional y Derecho Ambiental Penal; en conjunto forman el Tribunal de Justicia de Derecho Ambiental de América Latina.

En forma similar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal, podría contar con el apoyo de una Comisión Latinoamericana de Derecho Ambiental, compuesto por representantes de los Ministerios Públicos y Procuradurías de todos los países.

7 Tareas Pendientes

Los jueces nacionales, federales, y comunitarios, deben comprometerse firmemente a la protección, cuidado y preservación ambiental, meta del milenio de las Naciones Unidas y una necesidad vital de todos los países y los pueblos del mundo.

Todos debemos asumir un rol clave y contribuir en el respeto al medio ambiente, como parte de la misión de protección a la dignidad y derechos humanos. Asimismo trabajar en pro de garantizar desde una perspectiva jurídica que ningún ciudadano, ni la humanidad en su conjunto, se perjudiquen por los desastres ecológicos, la degradación medioambiental; las actividades de deforestación, contaminación del oxígeno, agua tierra; contaminación acústica y en general cualquiera que perjudique a la naturaleza.

El respeto y vigencia de los derechos humanos y los derechos de ecología, son fundamentales para la vida en el planeta; y conforme a un sentido amplio, los derechos también corresponden a la madre naturaleza.

El grave deterioro del medio ambiente mundial, requiere a la judicatura como garante y defensora de los derechos del medio ambiente, aplicar y hacer cumplir las leyes internacionales y nacionales de forma creativa, integradora, independiente y con valor; ello se va a lograr en forma plena, si en el corto o mediano plazo se constituye un Tribunal de Internacional de Justicia Ambiental.

Desde hace décadas, en foros y congresos se viene hablando de la posibilidad de constituir dicho Tribunal; sin embargo se hace objeciones de su posible costo y la poca voluntad de los países y Poderes Judiciales, para impulsar esta propuesta

El costo del Tribunal en realidad será muchísimo menor, a la continuación de los desastres ambientales, y los daños y perjuicios que se vienen generando en el continente, por este motivo; de otro lado, evitaría posibles conflictos entre pueblos y países, que ocasionan grandes gastos en prevención, seguridad y defensa, por la escasez de recursos naturales.

Parafraseando al insigne historiador peruano Jorge Basadre, si continuamos sin crear una alternativa que limite o contrarreste en algo, los desastres ecológicos y graves casos de contaminación ambiental, **en el futuro América Latina, podría convertirse en una charca, un páramo o una gigantesca fogata.**

Los indiferentes o distraídos respecto a lo que está ocurriendo, o los egoístas que priorizan sobre todas las cosas los intereses económicos; consciente o inconscientemente, están contribuyendo a que la región en el futuro pueda convertirse en una charca o un páramo; y algunos extremistas radicales antisistema; en una gigantesca fogata.

Solo una alternativa jurídica, sólida, impulsada por una visión prospectiva de responsabilidad social internacional, plasmada por ejemplo en un Tribunal de Justicia Ambiental de América Latina, con el compromiso mayoritario de los países de obedecer y cumplir las normas de Derecho Ambiental, podría evitar mayores desastres ecológicos.

Trabajemos con esperanza y entusiasmo, como un imperativo moral y legal día a día por el respeto del medio ambiente.

Asumamos con madurez y coraje, conciencia ambiental y realicemos las acciones legales conducentes a la protección de la ecología y el desarrollo sustentable. Si no somos conscientes y no defendemos el ambiente natural con acciones creativas y legales, que generen consenso y no división; mañana puede ser demasiado tarde, para todos nosotros y las futuras generaciones.